



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: ADRIANA VICTORIA SÁNCHEZ ZAPATA
Demandados: ACP COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A.
Radicado: 05001 31 05 014 2022 00175 01
Sentencia: S-283

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES, así como dar trámite al grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de esta misma, con ocasión de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el día 5 de junio de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES

ADRIANA VICTORIA SÁNCHEZ ZAPATA demandó a PORVENIR S.A., a PROTECCIÓN S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la

nulidad e ineficacia de la afiliación al Régimen de Ahorro individual, teniéndose como válidamente afiliada a COLPENSIONES y conservando los beneficios del Régimen de Prima Media –RPM-. Consecuencialmente se condene a PROTECCIÓN S.A. a efectuar el traslado junto con todos los dineros de la cuenta de ahorro individual a Colpensiones. Además, se condene a las demandadas a las costas procesales.

LOS HECHOS

Expone como fundamento de sus peticiones, que nació el 29 de mayo de 1966; que se afilió al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- el 25 de diciembre de 1986; que fue trasladada al RAIS en 1994 administrado por PROTECCIÓN S.A. donde se encuentra actualmente, además realizó varios traslados de manera horizontal; que al momento de afiliarse por primera vez al fondo privado no fue debidamente asesorada, ni informada sobre las implicaciones o consecuencias de trasladarse de régimen; que no le manifestaron que perdería los beneficios del RPM; que desde 2017 ha solicitado el traslado de régimen el cual fue negado por Colpensiones; que nuevamente solicitó el traslado en noviembre 2021 tanto a Colpensiones como a Protección S.A., siendo negada dicha solicitud argumentando la prohibición legal de 10 años o menos para reclamar la pensión; que Protección S.A. no cumplió con su deber de información en cuanto a la evolución de su situación pensional, la negociación del bono pensional, ni de los beneficios del RPM; y que en Colpensiones su pensión sería \$6.618.510, a diferencia de Protección S.A. que sería de \$1.896.075.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento de la demandante, sus cotizaciones al Régimen de Prima media y su traslado al RAIS; respecto de los demás hechos no le constan por ser circunstancias ajenas a su conocimiento, indicando además que no le consta las circunstancias de modo, tiempo y lugar que originaron el

traslado. Se opuso a las pretensiones en tanto no existió vicio en el consentimiento. Y propuso como excepciones la imposibilidad de declaratoria de ineficacia de traslado de fondo, prescripción, inexistencia de vicio en el consentimiento, devolución de cuotas de administración, imposibilidad de condena en costas y compensación.

PROTECCIÓN S.A. indicó que es cierta la fecha de nacimiento de la demandante; que no le consta las cotizaciones realizadas al ISS; señaló que es cierto que se trasladó de fondo a Protección S.A., efectuada el 21 de julio de 1994, donde se encuentra afiliada actualmente, como los posteriores traslados horizontales que realizó; que es cierta la solicitud ante Protección de traslado de régimen, la cual fue negada; también son ciertos los valores en pensión que tendría en cada régimen; que no es cierto que no se le informara sobre las consecuencias del traslado, modalidades de pensión y un comparativo pensional entre ambos regímenes, pues se le explicó que ambos regímenes son excluyentes por lo que no hay ventajas o desventajas, ya que la favorabilidad depende de cada caso en particular; y que si se le realizó un estudio previo, explicándosele todo lo concerniente con el bono pensional. Se opuso a las pretensiones al considerar que se encuentra frente a un acto existente, válido y exento de vicios. Como excepción propuso inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos, aplicación del precedente sobre los actos de relacionamiento, inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración y seguros previsionales.

PORVENIR S.A. indicó que es cierta la fecha de nacimiento de la demandante; que es cierta su vinculación con Porvenir S.A. siendo de forma libre y voluntaria en 1999 a Colpatria en 2005, y en el 2010 a Horizonte; que no es cierto que esta entidad no se le haya puesto de presente de forma clara y veraz los requisitos y diferencias aspectos que se tendrían en cuenta para adquirir pensión en el RAIS; y que no le constan los demás hechos, toda vez que hacen referencia a

situaciones que son ajenas a Porvenir S.A. Se opuso a todas las pretensiones por cuanto carecen de todo fundamento factico y jurídico. Como excepciones propuso la buena fe, ausencia de requisitos legales para que se declare la nulidad o ineficacia del traslado, aceptación tácita de las condiciones del RAIS, enriquecimiento sin causa derivado de la omisión de la figura de restituciones mutuas y prescripción.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia del 5 de junio de 2023, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS- administrado por PROTECCIÓN S.A., así como sus posteriores traslados; **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a trasladar a Colpensiones el valor de los gastos de administración, que conllevan lo pagado por seguros previsionales y garantía de pensión mínima, entre las fechas en que estuvo vinculada con esta entidad; **CONDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES, el valor de los dineros hallados en la cuenta individual de la actora, incluyendo para el efecto los rendimientos financieros, las comisiones de administración, que incluyen lo pagado por seguro previsional y la garantía de pensión mínima, a partir del 1º de agosto de 2013, así mismo el valor de los gastos de administración que conllevan a lo pagado por seguros previsionales, garantía de pensión mínima, entre las fechas en las cuales permaneció afiliada la actora; **ORDENÓ** a COLPENSIONES a reactivar la afiliación de la demandante al RPMPD, sin solución de continuidad, incluyendo las semanas de cotización sufragadas en el RAIS; **ORDENÓ** a PROTECCIÓN S.A. a que comunique el contenido de la decisión al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para los fines legales; **CONDENÓ** en costas a PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A.; y **ABSOLVIÓ** a COLPENSIONES de condena en costas.

RECURSO DE APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la apoderada de COLPENSIONES interpuso recurso de forma parcial, manifestando que se aparta de la decisión del despacho al no condenar al reconocimiento de la indexación, pues si bien es claro que el artículo 39 del decreto reglamentario 656 de 1994 define la cuota de administración de la que se apropia el RAIS como aquella que constituye ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones, teniendo derecho a estas, no obstante, de acuerdo a la jurisprudencia de la CSJ en el radicado 46292 expediente SL17595 de 2017, este órgano ha sostenido que las administradores de pensiones del RAIS tienen el deber de devolver al sistema todos los valores recibidos con motivo de la afiliación del actor con todos sus intereses y rendimientos, y que además deben ser indexadas, por lo que se solicita que revise el tema de la devolución de los gastos indexados, pues si no se hace de esa forma, estaría afectando la sostenibilidad financiera del sistema, causando un perjuicio a COLPENSIONES.

Se conoce igualmente del asunto en **Consulta** a favor de COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Dentro del término del traslado concedido a las partes, PORVENIR S.A. expuso en sus alegatos que siempre ha obrado propendiendo por la eficiencia y celeridad del presente proceso en todo momento, encaminado a los intereses de la parte actora, por lo que no se debería condenar en costas.

La parte DEMANDANTE en sus alegatos señaló que se debe confirmar la sentencia de primera instancia en todas sus partes, toda vez que se pudo demostrar que el traslado de estuvo viciado de nulidad, llegándose a la misma conclusión, tal y como lo ha expuesto la abundante jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia, e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado acreditados, se encuentran los siguientes: **i)** la Sra. ADRIANA VICTORIA SÁNCHEZ ZAPATA nació el 29 de mayo de 1966; **ii)** se afilió al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES –ISS-y realizó cotizaciones allí desde el 19 de junio de 1989¹ con un total de 65,43 semanas; **iii)** que el 21 de julio de 1994² suscribió el respectivo formulario de afiliación a la AFP PROTECCIÓN S.A.; **iv)** que posteriormente el 24 de marzo de 1999³ se trasladó a COLPATRIA S.A hoy PORVENIR S.A.; **v)** el 22 de octubre de 2002⁴ se traslada a ING S.A. hoy PROTECCIÓN S.A.; **vi)** luego el 9 de agosto de 2005⁵ se traslada a HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR S.A.; **vii)** nuevamente el 15 de septiembre de 2008⁶ se vincula con PROTECCIÓN S.A.; **viii)** el 28 de abril de 2010⁷ se afilia con HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR S.A.; **ix)** y finalmente el 27 de junio de 2013⁸ se traslada nuevamente a PROTECCIÓN S.A., entidad en la que se encuentra actualmente vinculada.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada

¹ Folios 46 a 47 de la Contestación de la demanda de Colpensiones.

² Folio 25 de la Contestación de la demanda de Protección S.A.

³ Folio 80 de la Contestación de la demanda de Porvenir S.A.

⁴ Folio 26 de la Contestación de la demanda de Protección S.A.

⁵ Folio 79 de la Contestación de la demanda de Porvenir S.A.

⁶ Folio 27 de la Contestación de la demanda de Protección S.A.

⁷ Folio 78 de la Contestación de la demanda de Porvenir S.A.

⁸ Folio 29 de la Contestación de la demanda de Protección S.A.

en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de las consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993⁹, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad*

⁹ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la

compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas de la afiliada, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no

suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por la actora, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente la demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que no recuerda muchas de sus afiliación como lo fue con COLPATRIA S.A.; que su afiliación a Horizontes hoy Porvenir S.A. en el año 2005 y 2010, tan solo recuerda la que se dio en el 2010, cuando se encontraba laborando en el IBM, siendo citadas a la sala de reuniones, en donde les informaron que a partir de esa fecha iban a estar vinculados con esa administradora, y que por tal razón, debían diligenciar el documento de afiliación y esa fue la información recibida; que su afiliación con Porvenir, se dio debido a la amenaza de que el fondo público se iba a acabar, recibiendo ese mismo rumor año tras año; que básicamente todos sus traslados horizontales se dieron por indicaciones de las empresas. En cuanto a la afiliación con Protección S.A. en el año 1994, en la empresa donde laboraba, los reunieron con el mismo argumento que se iba a terminar el régimen público y podrían perder todos los aportes que hicieron, siendo la mejor opción afiliarse a un fondo privado, por lo que firmaron el formulario de afiliación, y tan solo le indicaron que era un fondo del grupo Sura, teniendo una muy buena rentabilidad; Y que en el año 2013 ingresó a la compañía Arus Compuredes, que es del grupo Sura, decidiendo regresar a Colpensiones, solicitud que se le fue negada.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle a la afiliada al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos,

la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.

(...)

En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos,** porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima,** pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."

Ahora, es necesario tener en cuenta que, en la sentencia ya referida, la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia fue clara en establecer que la declaratoria de ineficacia de traslado cubija a todas las entidades a las cuales estuvo vinculado el respectivo afiliado "... aun cuando, como es lógico, no todas participaron en el acto de afiliación inicial, porque las consecuencias de tal declaratoria implican dejar sin efectos jurídicos el acto de vinculación a tal régimen...".

Dijo además en esa providencia, que:

"Por ello, es que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, tal como asentó el Tribunal. (...)

De modo que, en este caso, la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional deben asumirla todas las entidades del régimen de ahorro individual a las que estuvo vinculado el actor, sin importar si tuvieron o no injerencia, o si participaron o no en el cambio de régimen pensional. Y aún en el evento de que Porvenir S.A. y Colfondos S.A. se consideren terceros, le asiste razón al actor en cuanto afirma en su

oposición que, en dicha situación, es aplicable el artículo 1748 del Código Civil. En consecuencia, las AFP deben reintegrar los valores que recibieron a título de cuotas de administración y comisiones."

En consecuencia, la decisión deberá ser **CONFIRMADA** en cuanto se le ordenó a cada entidad que proceda con la devolución de los conceptos descontados por cuotas de administración, incluyendo las primas de seguros y reaseguros y el porcentaje destinado a la garantía de pensión mínima, es decir, todas aquellas sumas de dinero recibidas durante el tiempo que la señora ADRIANA VICTORIA SÁNCHEZ ZAPATA estuvo vinculada a cada entidad.

Por otro lado, de acuerdo a la inconformidad presentada por la apoderada de COLPENSIONES, debe advertirse que la orden dada a PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos referidos en la sentencia de primera instancia y anteriormente mencionados, deben incluir la respectiva indexación, según lo ha indicado la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de esta entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal **indexación** y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que "... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar." Por tal razón, se deberá **ADICIONAR** este concepto.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y ADICIONADA.**

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día 5 de junio de 2023, y la **ADICIONA** en el sentido de ordenarle a la AFP PROTECCIÓN S.A. y a PORVENIR S.A., que los conceptos de cuotas por administración, aportes para el fondo de garantía de pensión mínima y los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, deben incluir la respectiva INDEXACIÓN.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres

Magistrado

Sala Laboral

Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **0833bb65077ea37c5b948b47a48f2d8c5cc615e9629b14df30f45be03ee85053**

Documento generado en 20/10/2023 03:51:02 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>